

RESOLUCIÓN No. 01278

“POR LA CUAL SE DECLARA LA PERDIDA DE FUERZA EJECUTORIA DE UN ACTO ADMINISTRATIVO Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES”

LA SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

De conformidad con la Ley 99 de 1993, el Decreto Único Reglamentario No. 1076 de 2015, los Acuerdos 257 de 2006 y 327 de 2008, los Decretos Distritales 109 de 2009 modificado por el Decreto 175 de 2009, el Decreto 531 de 2010 modificado y adicionado por el Decreto 383 de 2018, la Resolución 5589 de 2011, la Resolución 01865 de 2021 adicionada por la Resolución SDA 046 del 13 de enero de 2022, Decreto 01 de 1984 - Código Contencioso Administrativo derogado por la Ley 1437 de 2011 modificada por la Ley 2080 del 2021 y,

CONSIDERANDO

ANTECEDENTES

Que mediante Radicado No. **2009ER61501** del 1 de diciembre de 2009, presentado ante la Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre de la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA, la señora LILIA INES MORENO DE PLAZAS, identificada con cédula No. 20.131.161, solicitó la intervención silvicultural de tres (03) individuos arbóreos, ubicado en espacio privado, en la Calle 127B No. 49 -12, Localidad de Suba, de la ciudad de Bogotá D.C.

Que atendiendo a la solicitud, la Secretaría Distrital de Ambiente realizó visita el día 26 de noviembre de 2009, emitiendo para el efecto Concepto Técnico No. 2009GTS3931 del 03 de diciembre de 2009, por medio del cual autorizo a la señora LILIA INES MORENO DE PLAZAS identificada con cédula No. 20.131.161, para que realice los tratamientos silviculturales de **TALA** de tres (3) individuos arbóreos de las especies: dos (2) Cerezos y un (1) Durazno, emplazado en espacio privado en la Calle 127B No.49 -12, Localidad de Suba, de la ciudad de Bogotá D.C.

Que el precitado Concepto Técnico de conformidad con el Decreto 531 de 2010 modificado y adicionado por el Decreto 383 de 2018, y la Resolución No. 7132 de 2011 revocada parcialmente por la Resolución No. 359 de 2012, con el objeto de preservar el recurso forestal se estableció que el autorizado debe pagar por concepto de **COMPENSACIÓN** por tala de árboles, la suma de QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS (\$543.360) M/cte., equivalentes a 4.05 IVP(S), que corresponden a 1.09 SMMLV (año 2009). Así mismo, por Concepto de **EVALUACIÓN** y **SEGUIMIENTO** la suma de VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS PESOS (\$23.900) M/cte.

Que el Concepto Técnico No. 2009GTS3931 del 03 de diciembre de 2009, se notificó mediante Edicto el día 25 de marzo de 2010, a la señora LILIA INES MORENO DE PLAZAS identificada con cédula No. 20.131.161, y se desfijó el día diecinueve (19) de abril de la misma anualidad.

RESOLUCIÓN No. 01278

Que con el objeto de realizar seguimiento a los tratamientos silviculturales, se realizó visita el día 14 de julio de 2014, emitiendo para el efecto Concepto Técnico DCA No. 06665 del 11 de julio de 2014, el cual establece lo siguiente:

“Mediante Concepto Técnico 2009GTS3931 de 03/12/2009, se autorizó a Lilia de Plazas, la tala de dos (2) árboles de la especie Cerezo y un (1) árbol de la especie Durazno, procedimientos que fueron ejecutados totalmente por el tercero autorizado, situación verificada el 17/06/2014. La compensación a pagar fue estimada en \$543.360,15; correspondientes a 4.05 IVP's y 1.09 SMMLV. En cuento al pago por concepto de evaluación y seguimiento, se estimó en \$23.900,0. No se requirió salvoconducto de movilización de madera por no generar madera con valor comercial. No se autorizó la plantación de árboles como compensación por tala. No se allegan copias de los recibos de pago por concepto de compensación por tala, ni evaluación y seguimiento. (SIC).

Que, en virtud de lo anterior, el grupo jurídico de la Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre, previa revisión del expediente SDA-03-2014-5207, consultó a la Subdirección Financiera de la Secretaría Distrital de Ambiente, la cual indicó que no se registra soporte pago por parte de la señora LILIA INES MORENO DE PLAZAS identificada con cédula No. 20.131.161, por concepto de **COMPENSACIÓN** la suma de QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS (\$543.360) M/cte., y por Concepto de **EVALUACIÓN** y **SEGUIMIENTO** la suma de VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS PESOS (\$23.900) M/cte.

En consecuencia, a lo anterior, la Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre, de la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA, emitió Resolución No. 01743 del 29 de septiembre de 2015, **“POR LA CUAL SE EXIGE CUMPLIMIENTO DE PAGO POR COMPENSACIÓN Y EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE TRATAMIENTO SILVICULTURAL Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES”**, por medio de la cual se exigió a la señora LILIA INES MORENO DE PLAZAS identificada con cédula No. 20.131.161, cancelar la suma de QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS (\$543.360) M/cte., por concepto de **COMPENSACIÓN**, y por Concepto de **EVALUACIÓN** y **SEGUIMIENTO** la suma de VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS PESOS (\$23.900) M/cte.

Que, la Resolución N° 01743 del 29 de septiembre de 2015, fue notificada mediante Edicto el día 09 de diciembre de 2015 y ejecutoriada con fecha 23 de diciembre de 2015, según consta en el acta de ejecutoria que reposa en el expediente SDA-03-2014-5207.

Que mediante Resolución No. 01725 del 02 de septiembre de 2020, **“POR LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN 01743 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES”**, la Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre, de la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA, aclaró el nombre completo del tercero LILIA INES MORENO DE PLAZAS.

Que, la Resolución N° 01725 del 02 de septiembre de 2020, fue notificada mediante edicto el día 30 de noviembre de 2020 y ejecutoriada con fecha 09 de diciembre de 2020, según consta en el acta de ejecutoria que reposa en el expediente SDA-03-2014-5207.

RESOLUCIÓN No. 01278

Que mediante radicado No. 2021E179607 de fecha 26 de agosto de 2021, la subdirección Financiera de la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA, remite memorando a la Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre de la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA, informando lo siguiente:

“La Resolución No. 01743 del 29 septiembre 2015, por medio de la cual la Secretaría de Ambiente ordenó el pago de la suma de \$566.360 a la señora LILIA INÉS MORENO DE PLAZAS identificada con la C.C. 20.131.161 por concepto de evaluación y compensación para garantizar la persistencia del recurso forestal autorizado, quedó ejecutoriada el 23 de diciembre de 2015 según la constancia anexa.

La corrección del nombre de la deudora realizada por la entidad mediante la Resolución No. 01725 del 2 de septiembre de 2020 no modifica el término de firmeza de la Resolución No. 01743 del 29 de septiembre de 2015, de tal manera que a la fecha en la que fue recibida en la Secretaría de Hacienda para su cobro ya había perdido su ejecutoriedad, por haber transcurrido más de cinco (5) años de su firmeza sin que la administración hubiera realizado los actos correspondientes para hacerla efectiva.

De tal manera que a la fecha no es posible predicar la existencia de todos los elementos necesarios para que se trabaje la relación jurídico procesal de conformidad con lo estipulado en los artículos 68 del C.C.A. modificado por el artículo 99 de la Ley 1437 de 2011, que consagra que para que un acto administrativo preste mérito ejecutivo, éste debe contener una obligación clara, expresa y actualmente exigible, y en consecuencia el mismo, no reúne los presupuestos para constituir título ejecutivo que soporte el inicio de la ejecución coactiva.” (SIC)

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Que, la Constitución dispone como uno de sus principios fundamentales la obligación Estatal e individual de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación (art. 8°). Adicionalmente, en desarrollo de tal valor, nuestra Constitución recoge en la forma de derechos colectivos (arts. 79 y 80 C.P.) y obligaciones específicas (art. 95-8 C.P.) las pautas generales que rigen la relación entre el ser humano y el ecosistema. Con claridad, en dichas disposiciones se consigna una atribución en cabeza de cada persona para gozar de un medio ambiente sano, una obligación Estatal y de todos los colombianos de *proteger la diversidad e integridad del ambiente* y una facultad en cabeza del Estado tendiente a *prevenir y controlar los factores de deterioro y garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración y sustitución.*

Que, el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, contempla lo relacionado con las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales, indicando entre ellas: *“Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales (...)”*, concordante con el 65 que establece las atribuciones para el Distrito Capital.

RESOLUCIÓN No. 01278

Que ahora bien, la competencia como autoridad ambiental atribuida a la Secretaria Distrital de Ambiente, se enmarca en el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, el cual señaló las competencias de los grandes centros urbanos de la siguiente manera:

“Artículo 66. Competencias de Grandes Centros Urbanos. Modificado por el art. 214, Decreto Nacional 1450 de 2011. Los municipios, distritos o áreas metropolitanas cuya población urbana fuere igual o superior a un millón de habitantes (1.000.000) ejercerán dentro del perímetro urbano las mismas funciones atribuidas a las Corporaciones Autónomas Regionales, en lo que fuere aplicable al medio ambiente urbano. Además de las licencias ambientales, concesiones, permisos y autorizaciones que les corresponda otorgar para el ejercicio de actividades o la ejecución de obras dentro del territorio de su jurisdicción, las autoridades municipales, distritales o metropolitanas tendrán la responsabilidad de efectuar el control de vertimientos y emisiones contaminantes, disposición de desechos sólidos y de residuos tóxicos y peligrosos, dictar las medidas de corrección o mitigación de daños ambientales y adelantar proyectos de saneamiento y descontaminación.” [...].

Que el artículo 71 de la Ley 99 de 1993, determinó:

“Artículo 71º.- De la Publicidad de las Decisiones sobre el Medio Ambiente. Las decisiones que pongan término a una actuación administrativa ambiental para la expedición, modificación o cancelación de una licencia o permiso que afecte o pueda afectar el medio ambiente y que sea requerida legalmente, se notificará a cualquier persona que lo solicite por escrito, incluido el directamente interesado en los términos del artículo 44 del Código Contencioso Administrativo y se le dará también la publicidad en los términos del artículo 45 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se utilizará el Boletín a que se refiere el artículo anterior”.

Que según lo dispuesto por el Decreto 1791 de 1996 por el cual se regula el aprovechamiento forestal de arbolado aislado, determinó en su artículo 58:

[...] “ Cuando se requiera talar, transplantar o reubicar árboles aislados localizados en centros urbanos, para la realización, remodelación o ampliación de obras públicas o privadas de infraestructura, construcciones, instalaciones y similares, se solicitará autorización ante la Corporación respectiva, ante las autoridades ambientales de los grandes centros urbanos o ante las autoridades municipales, según el caso, las cuales tramitarán la solicitud, previa visita realizada por un funcionario competente, quien verificará la necesidad de tala o reubicación aducida por el interesado, para lo cual emitirá concepto técnico.

La autoridad competente podrá autorizar dichas actividades, consagrando la obligación de reponer las especies que se autoriza talar. Igualmente, señalará las condiciones de la reubicación o transplante cuando sea factible.” [...].

RESOLUCIÓN No. 01278

Que, es de advertir que con la Ley 1437 de 2011 por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo prescribe en su artículo 308 un régimen de transición y vigencia que en cita prevé: “El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauran con posterioridad a la entrada en vigencia.

Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”.
(Subrayado fuera de texto).

Que, de la transcrita prescripción se observa con claridad que para el presente caso son aplicables las disposiciones traídas por el Decreto 01 de 1984 - Código Contencioso Administrativo.

Que, expuesto lo anterior, el artículo tercero, Principios Orientadores del Código Contencioso Administrativo, del Título I Actuaciones Administrativas, prevé: “*Las actuaciones administrativas se desarrollarán con arreglo a los principios de economía, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicción*”.

Que, en virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso oficioso de los procedimientos y conforme al principio de eficacia se deberá tener en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo los obstáculos puramente formales con el fin de evitar las decisiones inhibitorias.

Que, para complementar debemos mencionar el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, el cual preceptúa: “En los aspectos no contemplados en el código, se seguirá el código de procedimiento civil, en lo que no sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción de lo Contencioso administrativo”.

El código de Procedimiento Civil (Decreto 1400 de 1970), fue derogado por el Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012), el cual entró en vigencia íntegramente desde el primero (01) de enero de 2016 (Acuerdo No. PSAA15-10392 del 1° de octubre de 2015 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura).

En este orden de ideas, el artículo 122 del Código General del Proceso, establece que: “*El expediente de cada proceso concluido se archivará (...)*”.

Expuesto lo anterior, resulta pertinente acudir al artículo 66 del Código Contencioso Administrativo que determina los eventos en los cuales opera la pérdida de fuerza ejecutoria de los actos administrativos que en cita prevé:

“ARTÍCULO 66. Modificado por el art. 9, Decreto Nacional 2304 de 1989 Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos serán obligatorios mientras no hayan sido anulados o suspendidos por la jurisdicción en lo contencioso administrativo, pero perderán su fuerza ejecutoria en los siguientes casos:

1. Por suspensión provisional.

RESOLUCIÓN No. 01278

2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.
3. **Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la administración no ha realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos.**
4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto.
5. Cuando pierdan su vigencia". (Negritas y subrayado fuera de texto).

En virtud de esta causal, los actos administrativos pierden fuerza ejecutoria y la administración el poder de hacerlos efectivos directamente.

Que, de conformidad con la norma transcrita, es importante hacer referencia a la Sentencia C-069 de 1995 de la H. Corte Constitucional, quién se pronunció respecto de la pérdida de fuerza ejecutoria de los actos administrativos, en uno de sus apartes de la siguiente manera: "(...) ACTO ADMINISTRATIVO-Existencia. La existencia del acto administrativo está ligada al momento en que la voluntad de la Administración se manifiesta a través de una decisión. El acto administrativo existe, tal como lo señala la doctrina, desde el momento en que es producido por la Administración, y en sí mismo lleva envuelta la prerrogativa de producir efectos jurídicos, es decir, de ser eficaz. De igual manera, la existencia del acto administrativo está ligada a su vigencia, la cual se da por regla general desde el momento mismo de su expedición, condicionada, claro está, a la publicación o notificación del acto, según sea de carácter general o individual (...)"

Que, en otro de sus apartes, la Corte manifestó acerca de la causal tercera de pérdida de fuerza ejecutoria del Artículo 66 del Código Contencioso Administrativo lo siguiente:

"Referente a la pérdida de ejecutoria de los actos administrativos "cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la administración no ha realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos" y "cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto", de que tratan los numerales 3° y 4° del artículo 66 del Decreto 01 de 1984, materia de la demanda, estima la Corporación que dichas causales se ajustan al mandato contenido en el artículo 209 de la Carta Política, según el cual la función administrativa se desarrolla con fundamento en los principios de eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, correspondiendo a las autoridades administrativas coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado.

"En la misma norma se predica que la administración pública, en todos sus órdenes tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley lo cual permite consagrar causales legales de cesación de los efectos de los actos de la administración, como las anotadas anteriormente."

"(...)"

"Finalmente cabe advertir que la causal de pérdida de fuerza ejecutoria cuando no se realizan los actos que correspondan para ejecutarlos, constituye ciertamente una garantía de los particulares, frente a la desidia por parte de la administración para poner en ejecución sus propios actos."

RESOLUCIÓN No. 01278

“(...)”

Que en virtud de esta causal, los actos administrativos pierden su fuerza ejecutoria, y, por ende, la administración el poder de hacerlos efectivos directamente, cuando después de cinco años la misma no ha realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos.

Que como corolario de lo anterior, teniendo en cuenta que a la fecha han transcurridos más de cinco (5) años del acto administrativo por el cual se hizo exigible una obligación, esta Secretaría considera pertinente declarar su pérdida de fuerza ejecutoria, aplicando para tales efectos la causal tercera del Artículo 66 del Código Contencioso Administrativo.

Que, a través del artículo 103 del Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 2006, se estableció:

“Artículo 103. Naturaleza, objeto y funciones básicas de la Secretaría Distrital de Ambiente. *Modificado por el art. 33, Acuerdo Distrital 546 de 2013. La Secretaría Distrital de Ambiente es un organismo del Sector Central con autonomía administrativa y financiera y tiene por objeto orientar y liderar la formulación de políticas ambientales y de aprovechamiento sostenible de los recursos ambientales y del suelo, tendientes a preservar la diversidad e integridad del ambiente, el manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales distritales y la conservación del sistema de áreas protegidas, para garantizar una relación adecuada entre la población y el entorno ambiental y crear las condiciones que garanticen los derechos fundamentales y colectivos relacionados con el medio ambiente. (...)*”

Que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 109 de 2009, modificado por el Decreto 175 de 2009, por medio del cual se reorganiza la estructura de la Secretaría Distrital de Ambiente, se señala:

“Artículo 3°. Denominación y Naturaleza Jurídica. *La Secretaría Distrital de Ambiente es un organismo del Sector Central del Distrito Capital con autonomía administrativa y financiera.*

Artículo 4°. Objeto. *Corresponde a la Secretaría Distrital de Ambiente orientar y liderar la formulación de políticas ambientales y de aprovechamiento sostenible de los recursos ambientales y del suelo, tendientes a preservar la diversidad e integridad del ambiente, el manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales distritales y la conservación del sistema de áreas protegidas, para garantizar una relación adecuada entre la población y el entorno ambiental y crear las condiciones que garanticen los derechos fundamentales y colectivos relacionados con el medio ambiente.*

Que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 109 de 2009, modificado por el Decreto 175 de 2009, por medio del cual se reorganiza la estructura de la Secretaría Distrital de Ambiente y la Resolución SDA 1865 del 06 de julio de 2021 adicionada por la Resolución SDA 046 del 13 de enero de 2022, estableció en su artículo 5, numeral 13, lo siguiente:

[...]

RESOLUCIÓN No. 01278

“ARTÍCULO 5. Delegar en la Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre, la proyección y expedición de los actos administrativos relacionados con el objeto, funciones y naturaleza de la Subdirección y que se enumeran a continuación:

[...]

*13. Expedir los actos administrativos que, de oficio o a petición de parte, declaren o niegan la pérdida de fuerza ejecutoria de los actos administrativos de carácter permisivo. Que, por lo anterior, y en aras de garantizar el debido proceso, derecho de defensa y seguridad jurídica, esta Subdirección concluye que no hay actuación administrativa a seguir y por ende encuentra procedente ordenar el **ARCHIVO** del expediente SDA-03-2014-5207, acorde con los lineamientos legales para ello establecidos.*

Que por lo anterior, esta Subdirección concluye que no hay actuación administrativa a seguir y por ende encuentra procedente ordenar el ARCHIVO del expediente SDA-03-2014-5207, toda vez que la Resolución No. 01743 del 29 de septiembre de 2015, notificada mediante edicto el día 09 de diciembre de 2015 y ejecutoriada con fecha 23 de diciembre de 2015, ha dejado de ser exigible para la Administración Distrital en virtud de la pérdida de su fuerza ejecutoria. En tal sentido, se entiende que no existe actuación administrativa a seguir y por ende se dispone el archivo definitivo acorde con los lineamientos legales para ello establecidos.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Declarar la pérdida de fuerza ejecutoria de la Resolución No. 01743 del 29 de septiembre de 2015, por las razones expuestas en la parte motiva del presente Acto Administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO. Como consecuencia de la anterior declaratoria, se ordena el ARCHIVO de las actuaciones administrativas contenidas en el expediente No. SDA-03-2014-5207, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

Parágrafo. Una vez en firme la presente providencia, remitir el expediente SDA-03-2014-5207, al grupo de expedientes de esta Autoridad Ambiental, a efectos de que proceda a su archivo definitivo.

ARTÍCULO TERCERO. Notificar el presente Acto Administrativo a la señora LILIA INES MORENO DE PLAZAS, identificada con cédula de ciudadanía No. 20.131.161, en la Carrera 6 No. 14 - 98, de la ciudad de Bogotá D.C., de conformidad con lo previsto en el artículo 44 y 45 del Decreto 01 de 1984 - Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO. Una vez ejecutoriada la presente providencia comunicar a la Subdirección Financiera de la Secretaría Distrital de Ambiente, para lo de su competencia.

ARTÍCULO QUINTO. Una vez ejecutoriada la presente providencia comunicar a la Subsecretaría General y de Control Disciplinario de la Secretaría Distrital de Ambiente, para lo de su competencia.

